No tienen fuerza en el Perú las sentencias extranjeras que resuelven sobre asuntos relativos a bienes raíces situados en el territorio nacional.

Recurso de nulidad interpuesto por The Peruvian Sugar States Co. en la causa que sigue con doña Luisa González de Dreyfus, sobre cumplimiento de una ejecutoria pronunciada por Tribunal extranjero.—De Lima.

Excmo. Señor:

Lo que en este juicio se controvierte versa en sustancia sobre que se dé fuerza y valor ejecutorios a las providencias dictadas por Tribunales ingleses, en el juicio seguido ante ellos por doña Luisa González viuda de Dreyfus, contra la Peruvian Sugar States Company Limited; juicio en el que habiendo sido nombrado Síndico y Administrador de todos los bienes y activo de dicha Compañía anónima, don William Cash, éste confiere poder especial en ese carácter al doctor Manuel A. Olaechea, para que entable, comience y prosiga o comparezca y defienda cualquier pleito u otros procesos judiciales en el Perú; o, en otros términos, para que se conceda *exequátur* a los actos que contiene el instrumento que acompaña el doctor Manuel A. Olaechea a fojas 3, interponiendo a tal respecto la demanda de fojas 15, con la que da comienzo al juicio deliberativo que se ha propuesto seguir.

Una de dos: o dicho instrumento es mero mandato, en virtud del cual trata el doctor Olachea de que se le dé representación sustituida por don Guillermo Cash, nombrado como se ha dicho Síndico y Administrador de todos los bienes y activo de la Compañía anónima establecida en la ciudad de Londres, o lo que se persigue es, que se dé valor y fuerza aquí, mediante legítima intervención de los Tribunales, al acto de que se ocupa el preindicado instrumento. Si lo primero, no se ha menester pedir el *exequatur* para que sea reconocido como válido ese poder otorgado en país extranjero, bastando apreciar si reúne las condiciones de legalidad indispensables para que surta efecto como tal mandato; de lo que indudablemente no se trata en el presente juicio. Luego quedó el segundo extremo planteado, o sea el referente a que se reconozca de modo expreso, fuerza a ese acto en virtud del cual el poderdante, don Guillermo Cash, fué investido del carácter de Síndico y Administrador de todos los bienes y activo de la Peruvian Sugar States Company Limited.

Bajo tal concepto, la acción incoada es improcedente, así porque sólo la concede a las sentencias, nuestra ley procesal en el Título XXIX, Capítulo VI, Sección 2.ª, del Código de Procedimientos Civiles, condición que desde luego no reúne el acto del nombramiento del expresado Cash; como porque tampoco se ha comprobado, cual debía, la existencia de tratado con la Nación de la que emana ese acto judicial, o que se observe en la misma el principio de reciprocidad, cosas ambas que sancionan los artículos 1155 a fojas 1157 del propio Código. Condiciones son esas, cuya prueba

incumbe obligatoriamente a la parte demandante, según lo estatuye el 1162, id. id.

Pero hay más; en juicio deliberativo, de suyo grave y delicado por la trascendencia que pueda tener para con la soberanía e independencia del Estado, bien se advierte, estudiando con la debida prolijidad los de la materia, que se ha prescindido por completo de justificar, ante todo, la existencia de la cosa juzgada, que es requisito *sine qua non* conforme a los principios del Derecho Internacional Privado, para que pueda iniciarse el juicio deliberativo. Tampoco se ha contraído atención a comprobar, si en el acto para el que se pide *exequatur* se dió audiencia al demandado, acordándosele los medios ordinarios de defensa; si aquel mismo se pronunció en última instancia, ostentando el sello de la ejecutoria, y si, finalmente, se pronunció por el Juez o Magistrado competente.

Y nótese que nada se arguye acerca del otro requisito que establecen los enunciados principios, cual es, el de si la resolución cuya extraterritorialidad se solicita, encierra algo contrario al derecho público de este país, en el que se pretende su ejecución; porque éste y otros puntos han sido extensa y eruditamente tratados en la vista fiscal de fojas 36.

De consiguiente, la resolución recurrida—que sólo por su importancia puede considerarse objeto del recurso extraordinario de nulidad, desde que no versando el juicio sobre sentencia, según se ha hecho ver, no puede ser de estricta aplicación la parte final del artículo 1156 del Código tantas veces citado—; esa resolución, se repite, ha sido dictada con arreglo a los preceptos de nuestra ley positiva y ajustada a los principios de derecho.

Opina, según eso, el Fiscal, que no hay nulidad en el auto superior de fojas 39 por el que se declara sin lugar la demanda de deliberación formulada por el doctor Olaechea en su referido escrito de fojas 15, y que no la hay tampoco en su complementario, el auto de fojas 52, por el que se deniega la aclaratoria y modificación que por el mismo doctor Olaechea se solicita en el escrito de fojas 44. Así puede servirse resolverlo V.E., salvo su más acertado parecer. Ordenándose el reintegro de papel.

Lima, 2 de mayo de 1913.

GADEA.

Lima, 27 de mayo de 1913.

Vistos: de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal; y considerando: que según lo prescrito en el artículo 1159 del Código de Procedimientos Civiles, para que se declare que las sentencias extranjeras tienen fuerza en la República se requiere que no resuelvan sobre materias cuyo juzgamiento compete a los Tribunales peruanos; y que conforme a lo dispuesto en el inciso 1.º del artículo siguiente, corresponde exclusivamente a éstos el conocimiento de los asuntos relativos a los bienes raíces situados en el territorio nacional; declararon no haber nulidad en el auto superior de fojas 39, su fecha 6 de julio del año próximo pasado, y en el de fojas 52, del 20 de noviembre del mismo año, por los que, respectiva-

---

mente, se declara sin lugar la demanda de *exequá-tur* formulada a fojas 15 por el doctor Manuel A. Olaechea, y la declaratoria y modificación solicitadas por el mismo a fojas 44; condenaron en las costas del recurso a la parte que lo interpuso; y los devolvieron.

Eguiguren —Villa-García —Eráusquin —Leguía y Martínez —Quintana.

Se publicó conforme a ley.

J. Gallagher y Canaval.